

Salvaje asesinato de líder de víctimas

Óscar Maussa trabajaba por la restitución de tierras con los campesinos del Urabá. Con este, **ya van 47 casos en cinco años.**

Hasta San Juan de Nepomuceno (Bolívar), a donde llegó hace dos años huyendo de las amenazas por reclamar tierras robadas por los 'paras' en Turbo (Antioquia), persiguieron los asesinos al líder de restitución de tierras en Urabá Óscar Manuel Maussa Contreras.

Justicia

Él, según las estadísticas oficiales, es el líder campesino número 47 que es asesinado desde el 2005, cuando la desmovilización de las autodefensas abrió espacios para que las víctimas empezaran a reclamar las tierras de las que los despojaron. Su cadáver

fue encontrado el miércoles, amarrado a un árbol y con evidencias de haber sido apedreado y torturado hasta la muerte. Lo mataron de la misma manera que a otros dos voceros campesinos de Urabá: Albeiro Valdez Martínez y Hernando Pérez.

"La protección de las víctimas que reclaman tierras debe tener la misma prioridad que la restitución como tal", manifestó Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo que "condenó y repudió" el asesinato en un comunicado.

El cuerpo tenía evidencias de haber sido apedreado y **torturado hasta la muerte.**

13
AÑOS DE TRABAJO

por la causa de los derechos sobre tierras en Turbo llevaba Maussa Contreras.

El hecho también causó el rechazo inmediato del Gobierno, que pidió celeridad para investigar el caso. Incluso, el vicepresidente, Angelino Garzón, anunció que estará este lunes en Apartadó para realizar una reunión con las víctimas y evaluar su situación.

Hace un mes, en esta zona, resultó gravemente herido el también líder Fernando Ena-

morado, quien fue atacado por hombres armados.

Maussa Contreras, quien dirige la asociación campesina Cootragloban, llevaba 13 años reclamando sus derechos sobre tierras en la vereda La Esperanza, en zona rural de Turbo.

De acuerdo con un comunicado del Alto Comisionado, Maussa y su familia "fueron desplazados en 1997 del corregimiento antioqueño de Blanquicet, junto a otras 11 familias pertenecientes a su cooperativa".

Desde septiembre del 2006 contaba con medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El líder había sido trasladado a la región de San Juan de Nepomuceno por las constantes amenazas que recibía, al parecer por miembros de bandas criminales. Hacia ellas, de hecho, apuntan las primeras hipótesis del crimen.

"Este tipo de actos no pueden seguir ocurriendo en un país que está hablando de reconciliación, que busca caminos de paz", dijo Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión de Reparación.

Este tipo de actos no pueden seguir ocurriendo en un país que está hablando de reconciliación"

Eduardo Pizarro Leongómez
PRESIDENTE DE LA CNRR